
DESAFIOS Y OBJETIVOS REGIONALES PARA LOS AÑOS 90 EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Valdimir Acosta
Consultor UNESCO

El presente trabajo fue presentado -en su versión completa- en la Reunión Intersectorial sobre Nuevas Estrategias para la Acción Operacional de la UNESCO en América Latina y el Caribe. (Caracas, 23-27 de abril, 1990)

La situación actual de América Latina y el Caribe: Algunas tendencias para los años 90

Dadas la profundidad y multiplicidad de la crisis actual de América Latina y el Caribe y dadas igualmente las numerosas particularidades y las diversas alternativas coyunturales que una situación tan rica, conflictiva y cambiante ofrece de un país a otro o de una subregión a otra, no es nada fácil aventurarse en el terreno de las previsiones para unos años como los venideros, cargados de todas esas perspectivas de mutación y de conflicto. Sin embargo, más allá de coyunturas particulares y de terrenos en los que toda previsión carece de sustento serio, hay grandes campos relacionados con la evolución de estructuras económicas, sociales, culturales o políticas, en los que sí parece posible prever tendencias de mayor alcance, menos rápidamente modificables y por tanto más capaces de asimilar los riesgos de una prospectiva.

Fundamental dentro de este inevitable conjunto de previsiones es el examen de las perspectivas globales de la región en el área del crecimiento y de la recuperación económica. No hay por qué eludir la verdad: las perspectivas económicas parecen poco prometedoras para el conjunto de la región; y más allá de inevitables diferencias de un país a otro, si se acepta que la crisis no es simplemente coyuntural -y por tanto superable con simples ajustes neoliberales de corte monetarista- hay que pensar que las dificultades prometen ser mayores y el desafío más grande, siempre que lo que se quiera no sea únicamente obtener algunas mejoras económicas al precio de comprometer más el futuro.

Las Perspectivas Económicas y el peso de la deuda externa

Dejando de lado algunos fracasos que han contribuido a profundizar la crisis y algunos éxitos a medias, autoritarios o no, lo cierto es que más allá de la aceptación casi universal en la región de que no se trata de volver a los modelos y errores estatistas, paternalistas e ineficientes del pasado, todo indica que las políticas de ajuste o de reestructuración económica emprendidas hasta el presente en la región según recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y apoyadas en una concepción neoliberal, aún en aquellos casos en que han contribuido a una recuperación y a un relativo saneamiento de las finanzas públicas

reduciendo déficits fiscales y desarrollando mecanismos internos de mercado, no han podido impedir, dada la concepción que les sirve de base, que se produzcan nuevos e igualmente peligrosos desajustes y que se agudicen más aún ciertos problemas dramáticos de vieja data.

Economías como las latinoamericanas, de escasa competencia y mucho oligopolio, pero con cierta producción industrial, parecieran estar convirtiéndose en economías de carácter parasitario, dominadas por poderosos grupos bancarios y financieros y caracterizadas por una tendencia a la especulación y al rentismo que es estimulada por los altos rendimientos del dinero y por los nulos beneficios de la inversión industrial, comercial o agrícola. La inflación se ha mantenido alta y en muchos casos, tras momentáneas caídas debidas a violentos ajustes de alto costo social, ha repuntado al poco tiempo con más fuerza, pasando a niveles de tres y hasta más dígitos y empobreciendo cada vez más a las grandes mayorías y a las otrora prósperas clases medias urbanas.

La distribución del ingreso, ya exageradamente regresiva, tiende a volverse aún más injusta; y mientras una exigua minoría se enriquece con estas políticas, suerte de replanteamiento de la acumulación interna para favorecer sus intereses, mayores son cada vez los sectores sociales que quedan fuera del consumo o que se ven forzados a reducirlo seriamente. La injusticia social aumenta y con ella crecen las cifras de pobres y marginales y los porcentajes insostenibles representados por los que quedan por debajo de la línea fluctuante de pobreza crítica. Los subsidios directos que se ofrecen, si bien llegan más fácilmente hasta los pobres, cobran carácter degradante de limosnas, se prestan también a manipulaciones y es bien sabido que en el fondo nada pueden resolver.

La desindustrialización se ha convertido en objetivo económico y buena parte de la costosa capacidad instalada de la industria latinoamericana ha sido desmantelada en nombre de una competencia que no siempre se

desarrolla más allá de ciertos límites y que no pareciera tomar en cuenta otros aspectos del proceso de crecimiento económico. La eliminación de subsidios a la producción agrícola en nombre de un liberalismo económico que los grandes y desarrollados recomiendan a los países en desarrollo mientras ellos protegen su agricultura y sus mercados, arruina la producción del campo, ya entorpecida por las elevadas tasas de interés, y reduce el consumo agrícola interno, beneficiando sólo a la agroindustria y a los grupos exportadores a los que se intenta estimular.

Pero ni siquiera el estímulo a las exportaciones propuesto como salida a la crisis parece tener muchas perspectivas reales. El crecimiento sostenido de las exportaciones no tiene muchas posibilidades. No sólo por el proteccionismo y las restricciones no arancelarias de los países industrializados sino también porque hasta ahora la recuperación de la economía mundial es más bien lenta y porque todo indica que una recuperación más acelerada, si es que se produce en los años venideros, parecería más probable que se base en mayor peso de los intercambios Norte-Norte, en mayor competitividad y en mayor incidencia de las nuevas tecnologías, reductoras de la importancia de los productos primarios y del papel de la mano de obra barata como componente de los costos.

Todo ello parece perjudicar seriamente a América Latina y el Caribe y a sus exportaciones; y si es quizá probable que algunos países del área, sobre todo los exportadores de petróleo como Venezuela, Ecuador y quizá México, queden fuera de esta tendencia, dada la nueva realidad de Europa oriental y del desintegrado campo socialista que casi seguramente implicará a mediano plazo una mayor demanda de combustible y de otros bienes primarios y manufacturados, lo cierto es que el peso de la región latinoamericana y caribeña en el comercio mundial se ha venido reduciendo seriamente, no obstante que la orientación reciente hacia modelos neoliberales de sesgo exportador ha contribuido a aumentar las cifras abso-

lutas en función de la obtención de divisas para cubrir los pagos de la deuda externa.

Esta situación parece estar conduciendo a resultados poco favorables, pues por un lado, el aumento de las exportaciones en un contexto de deterioro creciente de los términos de intercambio representa un esfuerzo productivo enorme cuyos resultados y posibilidades no guardan consonancia con el mismo; y por otro, los compromisos de pago de la deuda impiden que ese aumento de las exportaciones (en términos absolutos, que no en porcentajes del comercio mundial) se traduzca en ventajas reales para países sometidos a ese esfuerzo.

Mas graves aún son las perspectivas de estas políticas. Por una parte, en efecto, la capacidad exportadora de América Latina y el Caribe tendrá que replantearse sobre nuevas bases productivas ya que la recuperación previsible de la economía mundial en términos de mayor intercambio Norte-Norte, mayor competitividad y mayor peso de las nuevas tecnologías, eliminará muchos rubros de esa competencia mundial, substituidos por tecnologías nuevas (jarabes de melaza de maíz que reemplazan el azúcar, fibras ópticas que desplazan el cobre, etc) y replanteará además la necesidad de incorporar algunas de esas nuevas tecnologías, a menudo costosas y difíciles, para compensar la caída proporcional del peso de la mano de obra en esa nueva producción sofisticada y ahorradora de fuerza de trabajo.

Por otra parte, la dependencia de las economías de América Latina y el Caribe respecto de los pagos de la deuda externa y de la banca internacional acreedora, fundamentalmente norteamericana, acompañado todo ello por la recuperación de la economía del país norteamericano y por la virtual desintegración del llamado campo socialista, van delimitando una perspectiva doblemente comprometedoras para la región latinoamericana y caribeña.

En primer término, porque sus exportaciones, mucho mas diversificadas desde el punto de vista de los destinatarios a lo largo de las

décadas anteriores a la eclosión de la crisis, se orientan cada vez más en forma mayoritaria hacia los Estados Unidos, como muestran los datos recientes, según los que se ha regresado en este terreno a los niveles de comienzos de los cincuenta, justamente en una época y en un contexto nuevo en que desde el punto de vista económico (y con unas cuantas excepciones como México y algo menos Venezuela) América Latina y el Caribe se han vuelto menos importantes para los Estados Unidos en tanto fuente de bienes primarios y en tanto destinatarios de productos manufacturados o de capitales y financiamiento.

En segundo lugar, porque dentro de la firme tendencia de los grandes intercambios mundiales de los países desarrollados -en términos de bienes, capitales y recursos tecnológicos- a orientarse en dirección Norte-Norte con preferencia a intercambios Norte-Sur, la desintegración del campo socialista y su apertura a reestructuraciones políticas democráticas y a cambios económicos profundos en dirección del mercado europeo y mundial y de la ampliación del consumo representa un terreno propicio y de gigantescas posibilidades para la inversión de recursos provenientes de los países capitalistas desarrollados, tanto de Europa, fundamentalmente Alemania Federal, como de los Estados Unidos y el Japón. Aún cuando cabe pensar en algunas posibilidades para América Latina y el Caribe en términos de incremento de exportaciones petroleras, primarias no petroleras y manufactureras hacia estos nuevos mercados ya previamente explorados por nuestros países cuando formaban parte del campo socialista, lo cierto es que en lo esencial esta apertura significa fundamentalmente para América Latina y el Caribe -al menos para los años próximos- menos inversión y menor financiamiento en términos proporcionales de parte de los países desarrollados, lo cual no parece muy favorable; y una actitud mas selectiva y exigente de parte de los organismos de cooperación internacional, lo cual podría tener en cambio algunos elementos positivos.

El problema central, el más agudo, continúa siendo el de la carga de la deuda externa, obstáculo fundamental a todo intento serio de recuperación y crecimiento económico por parte de los países latinoamericanos y caribeños. Como afirma claramente el SELA, que por lo demás acaba de proponer una reducción global del 75% de la misma para América Latina, el servicio de la deuda es el mayor obstáculo al crecimiento regional y su pago ha alcanzado en la década de los ochenta niveles exageradamente altos.

Es la consciencia de la gravedad de este cuadro, incluso por parte de la banca internacional y de los organismos financieros mundiales, lo que ha llevado al menos a la búsqueda de soluciones parciales, ya que al frente constituido por la banca internacional y los organismos financieros acreedores, los países de América Latina han preferido curiosamente oponer discusiones separadas y búsqueda de compromisos particulares.

En todo caso, lo cierto es que han comenzado a producirse algunos arreglos parciales y refinanciamientos entre países latinoamericanos y la banca acreedora en el marco de lo que se ha dado en llamar el Plan Brady. En este sentido, México hace un año y Venezuela en días recientes, han logrado acuerdos considerados favorables por sus respectivos gobiernos y que en uno y otro caso significan reducción de capital e intereses, períodos de gracia, ampliación de plazos y posibilidades de nuevas inversiones que, aunadas a la disminución del servicio de la deuda, podrían alimentar una cierta recuperación de sus economías, iniciada en el caso mexicano y anunciada en el venezolano. Estos acuerdos, además, podrían servir de base para otros arreglos y quizá para hacer entrar la discusión acerca de la deuda en un terreno más prometedor y que abra posibilidades más serias a un cierto nivel de recuperación económica para nuestros países. Todo ello podría significar sin duda una importante perspectiva favorable en medio de esta difícil situación.

Pero esto tampoco es seguro. Y no lo es porque por importante y decisivo que sea el peso del servicio de la deuda sobre los países latinoamericanos y por claro que sea su papel de principal obstáculo a la recuperación y al crecimiento, la deuda -como se ha intentado poner antes en evidencia al examinar las causas de la crisis actual y los rasgos de la década perdida- no parece haber sido más que el factor precipitador y agudizador al extremo de una situación de crisis ya iniciada en los años setenta en algunos países del área por agotamiento del modelo de crecimiento basado en la sustitución parcial de importaciones y en la integración y crecimiento en base a mercados restringidos de alto ingreso y a escasos niveles de autonomía financiera, productiva y tecnológica.

En efecto, de poco serviría reducir la carga de la deuda y reanimar posibilidades de acumulación y de inversión para el crecimiento si no se producen profundos replanteamientos en el terreno de las estrategias de desarrollo y sobre todo si no se consideran como parte estructural de las mismas -aparte de cuestiones políticas, sociales y culturales que no vendría al caso mencionar ahora- aspectos como el desarrollo de mercados que incluyan bienes masivos para las grandes mayorías, la reorientación del ingreso para intentar revertir su acentuado carácter regresivo y la búsqueda de una mayor justicia social enfrentando en sus raíces las causas del atraso, de la pobreza, de la marginalidad social y del desempleo.

Las Perspectivas Sociales y el Crecimiento de la Pobreza

De allí que, si las perspectivas específicamente económicas, aún siendo difíciles, ofrecen esperanza de mejoramiento en ciertos casos, las perspectivas que podríamos llamar sociales, en cambio, resultan mucho más definitivamente negativas ya que la tendencia al empeoramiento en este terreno se ve acentuada porque parece evidente que las mismas posibilidades de recuperación económica ge-

neradas por la aplicación de políticas de corte neoliberal implican de algún modo la profundización de la desigualdad económica y la acentuación de la pobreza y la marginalidad para las grandes mayorías.

Una de las mas claras consecuencias de esas políticas es la acentuación del carácter excesivamente regresivo que ha caracterizado a la distribución del ingreso en los países de América Latina y el Caribe. Si una de las grandes deficiencias de los modelos de crecimiento basados en el desarrollismo de los sesenta y los setenta fué que el crecimiento se hizo demasiado a favor de las minorías de alto ingreso y que generó una gran desigualdad social y un acentuado empobrecimiento mostrado por todos los estudios al respecto, no cabe duda de que las alternativas neoliberales actualmente vigentes en la mayor parte de los países del área han acentuado en poco tiempo esa ya demasiado injusta distribución del ingreso sin cuya profunda modificación ningún crecimiento puede llevar al desarrollo autosostenido y a la democracia participativa.

Aún más grave resulta admitir que al menos en los modelos desarrollistas y populistas de décadas anteriores, el hipertrofiado Estado cumplió funciones importantes de redistribución del ingreso capaces de atenuar los efectos de la regresividad del mismo generada por el modelo de desarrollo entonces vigente; y que esta función redistributiva, no obstante ser fuente de paternalismo y clientelismo, de despilfarro y reducción de estímulos a la competencia y a la productividad necesarias al crecimiento, desempeñó un papel social innegable y contribuyó incluso, en términos keynesianos, a la expansión de la demanda.

Las estrategias neoliberales actualmente en curso implican la reducción sustancial de ese papel redistributivo del Estado, lo que más allá de su posible contribución a un necesario saneamiento de la economía y a un mejor funcionamiento de mecanismos económicos de mercado orientados a estimular la eficiencia y la productividad tanto estatal como privada,

parece no tomar en cuenta que sin enfrentar de alguna manera, estructuralmente y a corto plazo, las causas de la creciente miseria de las mayorías latinoamericanas, acrecentada además por la crisis actual y por las propias políticas en curso, ningún crecimiento tendrá la fuerza económica ni la estabilidad social suficientes para sobrevivir.

Uno de esos acuciantes problemas es el del crecimiento demográfico y más aún el del crecimiento urbano, ya que en América Latina y el Caribe, como por doquier en el llamado mundo en desarrollo, el crecimiento demográfico es cada vez más el de las grandes ciudades, particularmente el de las capitales. Las proyecciones de los organismos internacionales calculan a la región una población de al menos quinientos millones de habitantes para el venidero año 2000. De esa población, que no obstante la reducción de los índices de natalidad y de fecundidad experimentados en la última década, crece todavía a un ritmo del 1,78% anual, ya el 69,5% del total era urbana para 1988 y se calcula que dentro de diez años habrá llegado al 71% del total en Centroamérica y al 84% en América del Sur.

Ese crecimiento acelerado ha significado un desmesurado aumento de la población urbana en la mayor parte de los países latinoamericanos, con casos extremos como Ciudad de México y Sao Paulo. El crecimiento urbano sostenido y progresivo, puesto en marcha con el inicio de la Revolución Industrial hace al menos dos siglos en Europa y admitido hasta hace algunas décadas como uno de los indicadores principales del crecimiento económico y del desarrollo, se ha venido convirtiendo en fenómeno más propio del llamado Tercer Mundo que de los países desarrollados.

Estos últimos, en efecto, han logrado prácticamente controlar su crecimiento demográfico, su urbanización y su distribución de ingreso limitando así la expansión urbana y atenuando las desigualdades sociales que la acompañan. En los llamados países en desarrollo, en cambio, el crecimiento demográfico

acelerado y el flujo masivo de población pobre del campo hacia ciudades que crecen acelerada e incontrolablemente, ha llevado a poner en duda la validez de este indicador como signo de desarrollo en la medida en que las ciudades de los países 'en desarrollo' se caracterizan principalmente por su magnitud desmesurada, que las hace incontrolables y que hace colapsar la administración estatal y los servicios, y por la profunda miseria de una creciente mayoría de sus habitantes, con todas las cargas sociales que situaciones de este tipo engendran.

Proyecciones de las Naciones Unidas estiman que para el año 2000, de las doce aglomeraciones urbanas mayores del mundo, todas auténticas megápolis de mas de trece millones de habitantes, solamente dos (Nueva York y Tokio-Yokohama) corresponderán a países desarrollados mientras las diez restantes se ubican en países 'en desarrollo', correspondiendo cuatro de ellas a América Latina: México con 26 millones, Sao Paulo con 24, Rio de Janeiro con 13,3 y Buenos Aires con 13,2. Estas cifras dejan de lado, por supuesto, el indetenible crecimiento de ciudades menores como Lima-Callao, Bogotá, Caracas, y algunas ciudades brasileñas.

El más grave problema de ese hasta ahora incontrolable crecimiento urbano es el aumento también incontenible de la miseria, la marginalidad, el desempleo y la delincuencia, todos ellos problemas sociales prioritarios que los países del área tendrán inevitablemente que enfrentar con decisión en los años y décadas venideras.

El problema de la pobreza es acuciante y si no se lo enfrenta decididamente toda posibilidad de crecimiento sostenido de América Latina y el Caribe se verá seriamente obstaculizada. Ya no se trata solamente de la existencia de una difundida y crónica pobreza rural y de un porcentaje elevado y creciente de pobres urbanos, viviendo todos por debajo de la línea de pobreza crítica y alcanzando para la región, según datos que tienden ya a ser superados, niveles correspondientes al 36% de la pobla-

ción total. Se trata ahora de la acentuación de la miseria urbana, del empobrecimiento de las mayorías y del deterioro creciente de los niveles de ingreso de las capas medias, a las que se había logrado extender los beneficios del crecimiento de las décadas anteriores y cuya expansión había sido uno de los indicadores de las perspectivas económico-sociales y político-culturales de ese desarrollo.

Las cifras mas recientes son parciales y las proyecciones incompletas, pero es mas que preocupante la rapidez con que aumenta año a año el porcentaje de latinoamericanos que viven por debajo de la línea de pobreza crítica (en el caso de Venezuela, un país relativamente afortunado, esta cifra se calculaba, para 1989, en un 38,05%); y muestra de ello es que los pobres, marginales y habitantes de tugurios representan mas de la mitad de la población de Ciudad de México y unos dos tercios en Rio de Janeiro. Algunos datos relativos al Brasil establecidos por la FAO y la OMS indican que para 1986 el 49,2% de las familias de ese país se hallaba bajo la línea de pobreza y que un 32,0% de las familias vivía en condiciones de indigencia. En cifras absolutas, unos 62 millones de personas podían ser consideradas pobres y 38,3 millones entraba en la categoría de indigentes. En su conjunto podía calcularse que en las 95 ciudades del país mayores de cien mil habitantes vivían en condiciones infrahumanas alrededor de 20 millones de personas, que para la fecha constituían el 21% de la población urbana brasileña. La población habitante de favelas ascendía a unos 12 millones de personas, vale decir, al 12,4% de la población urbana total. Lo mas explosivo parece ser esta concentración de la miseria en las grandes ciudades; y cálculos de las Naciones Unidas estiman que para dentro de diez años el 90% de los grupos humanos latinoamericanos que viven en condiciones de miseria extrema se concentrará en ciudades, particularmente en las mas grandes.

Problema particularmente sensible es el de la elevada tasa de mortalidad infantil y tambien el de la infancia abandonada. Varios millones de niños malnutridos ven transcurrir su

infancia fuera de las escuelas y los hogares, compartiendo su tiempo entre la mendicidad y sucesivos trabajos ocasionales pésimamente remunerados. En el sólo caso de Brasil se calculaba para 1987 que existían unos dieciseis millones de niños abandonados, pero el fenómeno es igualmente grave en las ciudades centro-americanas, en Ciudad de México, en Lima, Bogotá, Buenos Aires o Caracas.

Otro problema grave es el representado por el desempleo creciente y la marginalidad económica urbana que conducen a un desarrollo impresionante de la llamada economía informal. El crecimiento demográfico latinoamericano implica una alta tasa de aumento de la población económicamente activa, pero ya el modelo desarrollista de décadas anteriores, luego de una etapa francamente expansiva, había evidenciado su incapacidad para absorber la mayor parte de esa creciente oferta de fuerza de trabajo. Las políticas desindustrializadoras, la contracción económica y las necesarias podas burocráticas orientadas a hacer más eficiente y menos costosa la administración del Estado incrementan el desempleo y el empleo informal, pues una parte de los desempleados y de los que se van incorporando al mercado de trabajo sin conseguir ocupación acuden a la economía informal y a los servicios improductivos como necesaria forma de subsistencia.

La buhonería y los mercados transhumanes de todo tipo de productos ocupan un espacio cada vez mayor en las ciudades latinoamericanas. Enfrentar el reto representado por el desperdicio en este tipo de actividades de las aptitudes de una numerosa fuerza de trabajo, a menudo joven, que podría estar dando su aporte al crecimiento y logrando mejores oportunidades de vida y de trabajo, debería ser una tarea de primer orden que tomara en consideración al menos la necesidad de organizar esa economía informal, de tecnificarla en algunos casos y de tratar de integrarla a actividades productivas ligadas más sistemáticamente al crecimiento.

Pero el problema de la mano de obra tiene dimensiones aún más preocupantes. Sin olvidar que el crecimiento de las décadas anterior-

res contribuyó a formar una población trabajadora en parte tecnificada y preparada cuyas capacidades deberían ser aprovechadas o reorientadas dentro de las estrategias actuales de reanimación, lo más grave es sin duda que, según los cálculos de los organismos internacionales de cooperación, el crecimiento poblacional va a significar, desde ahora hasta el año 2000, la existencia de una oferta de fuerza de trabajo que exigiría la creación de cerca de cien millones de nuevos empleos, lo que significa que al menos una parte importante de esta cifra tendrá que ser cubierta en la década actual si no se quiere ver crecer en proporciones aún más alarmantes y peligrosas la desocupación, los servicios improductivos y la delincuencia.

Este es un último aspecto que vale la pena subrayar. Producto inevitable de la desocupación, del desempleo y de la miseria crecientes, aumentan en las ciudades latinoamericanas la delincuencia y la violencia, alimentadas también por flagrantes injusticias sociales, por la tolerancia hacia la corrupción vigente entre altos grupos políticos y económicos y por los mensajes a menudo incitadores del cine y la televisión. La inseguridad urbana es creciente, la represión policial es a menudo indiscriminada y siempre ineficaz y el descontento social en forma de confusa protesta contra la injusticia se canaliza más entre importantes sectores marginales hacia acciones directas de cruda violencia personal y no hacia luchas políticas o reivindicativas. El resultado de todo esto es una gran inestabilidad; y la amenaza que ello representa para cualquier sistema es grave, pues no parece fácil dentro de ambientes similares incrementar la participación ciudadana y ampliar las bases y el apoyo necesarios para cimentar y profundizar la democracia.

Profundización de la Democracia y Reforma del Estado

Esto último constituirá casi seguramente el principal desafío para la América Latina y el Caribe de los años venideros en el terreno político o político-administrativo. Cimentar y profundizar la democracia, ampliando y enriqueciendo la participación ciudadana a todos

los niveles, parece ser considerado por las más diversas corrientes de opinión dentro del panorama latinoamericano como una de las tareas prioritarias de esta década. Pero aunque son cada vez mayores las fuerzas comprometidas con este objetivo, no puede sin embargo afirmarse que lograrlo será fácil, dada la significación del cambio que se intenta y dados los importantes factores que -casi siempre de manera sorda- le ofrecen resistencia.

Hemos recordado ya que uno de los aspectos mas francamente positivos de esta difícil década en América Latina y el Caribe ha sido la creciente difusión de la institucionalidad democrática a lo largo del subcontinente, pudiendo afirmarse que los regímenes de democracia política dominan actualmente el panorama regional. Se trata de un importante logro que ha permitido abrir nuevas posibilidades al crecimiento de la sociedad civil y al desarrollo de la institucionalidad y de la participación ciudadana, golpeando el autoritarismo y el paternalismo heredado de las ya clásicas dictaduras que durante otras épocas pudieron creerse la representación simbólica de América Latina y el Caribe.

Pero con todo lo importantes que son estos logros, no parecen ser lo suficientemente profundos como para pretenderse definitivos; y esto ni siquiera en los países de tradición democrática mas probada. Varios peligros amenazan a las a menudo recientes democracias latinoamericanas. Uno de ellos es la vieja tradición centralista, paternalista y autoritaria que ha caracterizado casi toda la vida política independiente de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Aunado a ello se cuenta lo que no es sino la otra cara de lo anterior: la debilidad de la sociedad civil latinoamericana, su limitado desarrollo institucional y su más bien reciente incursión en el terreno de las luchas ciudadanas y la participación popular.

También incide con fuerza la amenaza representada por grupos sociales poderosos, tanto civiles como militares, a los que atrae a menudo el autoritarismo y a los que atemorizan los cambios y la participación popular. En

este terreno son preocupantes las amenazas que vienen del campo militar en algunos países que recientemente han conocido o recuperado la institucionalidad democrática, amenazas que sólo serán contrarrestadas en la medida en que la democracia y el espíritu participativo conviertan esos ejércitos de castas en instituciones más permeables al sentimiento mayoritario de sus pueblos.

Un último peligro conspira contra la estabilidad de los sistemas democráticos latinoamericanos y caribeños: la profunda desigualdad social generada por el crecimiento y agudizada por la crisis y por las políticas actuales de ajuste y recuperación; el creciente empobrecimiento y desmoralización de una clase media golpeada seriamente en su nivel de vida y en sus perspectivas; y la existencia de sectores mayoritarios empobrecidos y descontentos que no ven tampoco esperanzas de mejoría, que sólo confían en soluciones desesperadas y que resultan fáciles víctimas de la demagogia. Y cabe pensar que si bien hasta el presente en los países más seriamente golpeados por la crisis ha sido probablemente la gravedad de ésta lo que ha operado como factor disuasivo de nuevas recaídas militaristas, las amenazas no dejan de ser preocupantes; y deterioros mayores de algunas situaciones podrían precipitar las cosas.

Lo que parece desprenderse de todo esto es que, si los países y gobiernos latinoamericanos y caribeños intentan seriamente preservar la democracia, será imprescindible que en los años venideros intensifiquen y alienten el necesario proceso que se ha venido poniendo en marcha en casi todos ellos orientado hacia el logro de una reforma del Estado, de una mayor descentralización administrativa y de un aumento de la participación ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones a todos los niveles.

Este objetivo se vislumbra como vital para incrementar las posibilidades de subsistencia de la democracia en la región. Aunque hay distintos niveles de desarrollo de los programas de reforma del Estado entre los diversos

países del área y algunos de ellos, como Colombia y Brasil, parecen ser los que más han avanzado en este terreno, lo cierto es que los logros son importantes y prometedores en la medida en que el inicio de un proceso de decisivas reformas participativas y descentralizadoras como éstas resulta difícilmente detenable una vez que se lo ha puesto en marcha y que la participación ciudadana comienza a materializarse.

Esa reforma estatal fundamental persigue objetivos impostergables. En primer término, reestructurar a fondo un aparato estatal centralista, interventor e ineficiente que hace ya tiempo rebasó el límite de su capacidad de gestión, tratando con ello de abrir paso a la descentralización, a la eficiencia y a un grado variable pero importante de participación ciudadana en la gestión regional y local y en el diseño y puesta en práctica de políticas que afectan a toda la colectividad. En segundo lugar, replantear la concepción misma de los alcances y el funcionamiento de la democracia, haciendo que de un sistema de poderes públicos, instituciones y partidos dominados por pequeños grupos y de una participación ciudadana reducida al ejercicio periódico del voto para elegir presidente y congresantes, pueda pasarse al establecimiento de mecanismos más directos de escogencia y de control de esos y otros representantes populares y al ejercicio cabal de los derechos ciudadanos para el conjunto de la población. En tercer término, en fin, lograr por estos mecanismos el desarrollo de la sociedad civil, promoviendo todas las formas de participación y de gestión democrática y de lucha pacífica de la población en defensa de sus derechos y de sus reivindicaciones. Pareciera claro que del éxito progresivo que se logre en este campo dependerán en mucho las posibilidades no sólo de desarrollo de la democracia latinoamericana y caribeña sino quizá también su propia supervivencia en este cuadro de profunda crisis.

Los Problemas Ambientales:

Un grave desafío

Los problemas del medio ambiente y de la conservación de los recursos naturales representan otro de los grandes retos de la década; y muchos de ellos guardan estrecha relación con aspectos vitales como la reforma del Estado y la profundización de la democracia, como la reducción de la miseria y del crecimiento urbano y como el logro de un equilibrio más adecuado entre el campo y la ciudad. Algunos incluso tienen repercusiones internacionales y se ha intentado asociarlos parcialmente a la búsqueda de soluciones al pago de la deuda externa.

Uno de los más acuciantes de esos problemas es el deterioro del medio ambiente y su relación con la creciente ruptura del equilibrio entre desarrollo urbano y desarrollo rural y con el aumento incontrolable de la población de las ciudades y el incremento de la miseria en ellas. No cabe duda de que el deterioro ambiental, estimulado por las dimensiones irracionales de un crecimiento descontrolado y ausente de preocupaciones ecológicas, ha sido factor importante tanto del agravamiento de las condiciones de vida en el campo como de las migraciones en dirección de las ciudades, que contribuyen a su vez a acentuar ese deterioro y a desarticular aún más la necesaria interrelación entre medio rural y medio urbano.

Parece entonces evidente que la búsqueda de soluciones a problemas que han llegado a puntos críticos, y que no han sido enfrentados con firmeza por el Estado centralizado y burocrático, tendrá que estar a cargo de quienes se sienten más directamente afectados por ellos, esto es, por los organismos representativos de la ciudadanía a niveles regionales y sobre todo locales. La reforma estatal, la descentralización y la democracia participativa parecerían ser aquí las vías más adecuadas para plantearse mecanismos de solución a este tipo de problemas y para presionar a los organismos centrales del Estado para que definan y apliquen políticas pertinentes en tal sentido.

Buena parte de esos problemas, sin embargo, son demasiado complejos, tocan demasiados aspectos e intereses y además de firmes decisiones y apoyo ciudadano requerirán, para enfrentarlos con posibilidades de éxito, de la cooperación y de los recursos internacionales lo mismo que de la participación de los gobiernos de los países más directamente involucrados. Entre esos grandes problemas ambientales destacan por su importancia planetaria los relativos a la protección del sistema ecológico de la selva tropical húmeda suramericana, esto es, la región de la Amazonia y la Orinoquia, en los que se ha venido interesando la comunidad internacional y más particularmente algunas naciones industrializadas, y en los que tendrían necesariamente que participar a fondo los países en que se ubica el mencionado ecosistema.

El problema de la Amazonia es tan acuciente como complicado y será sin duda objeto de importantes discusiones y búsquedas de acuerdo a lo largo de la década. Lo más grave del mismo parecería ser que mientras se discute acerca de los derechos del Brasil y otros países vecinos a destruir parte del ecosistema amazónico en función de su expansión interna y su crecimiento económico, tal como hicieron hace uno o dos siglos los países industrializados con sus bosques y recursos naturales sin preocuparse mucho de la contaminación y del ambiente; y mientras los organismos ambientales internacionales del mundo desarrollado alertan sobre la irracional destrucción de especies vegetales y animales y sobre el peligro que para la humanidad tendría la destrucción de esta suerte de pulmón vegetal del planeta, continúa el proceso de destrucción a menudo irracional de la selva húmeda y el atentado contra las cabeceras de ríos como el Orinoco en busca de metales preciosos, sin que haya hasta ahora mecanismos capaces al menos de reglamentar esta deforestación y de controlar sus más peligrosas consecuencias. Es de esperar que proyectos como UNAMAZ puedan contribuir a enfrentar globalmente un problema tan complejo como este.

Un último aspecto de la problemática del medio ambiente y la conservación de recursos naturales para América Latina y el Caribe en años venideros pueden ser los llamados "swaps" de deuda por recursos naturales que han sido ya aplicados en algunos casos. Este sistema, promovido por organizaciones conservacionistas de países desarrollados, preocupadas por las amenazas de extinción de especies y de reservas forestales del mundo en desarrollo, intenta utilizar la difícil coyuntura creada en esos países por el servicio de la deuda externa para buscar solución a problemas ambientales que interesan a esas sociedades a cambio de reducción parcial de la carga financiera a que los mencionados países se encuentran sometidos. El sistema consiste en la adquisición, por parte de esas organizaciones conservacionistas, de fracciones de la deuda de un determinado país, con el descuento correspondiente al valor nominal de la misma, y luego en su redención mediante bonos o moneda local a fin de emplear estos recursos en la conservación de recursos naturales de ese mismo país.

El sistema ha sido ampliamente discutido, no sólo por la amenaza inflacionista que podría implicar para los países deudores, sino sobre todo por los peligros que podría representar para la soberanía territorial, dada la ingerencia de organizaciones extranjeras o intereses transnacionales que podrían ocultarse detrás de este tipo de convenios. Tratando de descartar de común acuerdo estos peligros, se ha logrado ya implementar algunos de estos "swaps" entre países latinoamericanos y organizaciones internacionales de protección ambiental. Uno de ellos se firmó en agosto de 1987 entre Bolivia y la organización norteamericana Conservación Internacional, mediante el cual el gobierno boliviano delimitó para esta última un millón y medio de hectáreas de bosque tropical en el Beni. Otro tuvo lugar en diciembre del mismo año entre el Fondo Mundial de la Fauna Silvestre (WWF), promotor de esta iniciativa, y el gobierno ecuatoriano, mediante un acuerdo que parece más favorable que el anterior y que dota a una fundación conserva-

cionista ecuatoriana de fondos derivados de la compra de la deuda a objeto de promover actividades de conservación. Un tercer "swap" fue convenido en 1988 en Costa Rica. Parece probable que se produzcan convenios similares en otros países; y aunque la experiencia de América Latina y el Caribe no ha sido muy favorable en estos arreglos financieros con organismos internacionales a cambio de territorio o de derechos lindantes con la soberanía, no es descartable que algunos de estos convenios puedan fundarse en criterios mas justos y beneficiosos.

La cooperación Internacional y sus Condiciones

La cooperación internacional será decisiva para América Latina y el Caribe en esta última década del siglo XX. El apoyo de los organismos multilaterales de cooperación financiera y técnica ha sido importante para la región desde la década de los cincuenta y ha contribuido en ella a la formación de recursos humanos y de capital. De todos modos, al menos en el caso latinoamericano y caribeño, si se la compara con otras regiones del llamado mundo en desarrollo, ha sido claramente insuficiente. Y es necesario recordar también que han incidido sobre ella el inmediatismo y la discontinuidad de las políticas gubernamentales latinoamericanas, y que esto produjo esfuerzos perdidos y recursos mal utilizados o desperdiciados.

Este aspecto resulta verdaderamente esencial porque lo que se desprende del análisis del cuadro actual y de las perspectivas inmediatas de la región es la existencia de problemas profundos en casi todos los órdenes. Y aunque es claro que no corresponde a la cooperación internacional la responsabilidad de resolverlos sino fundamentalmente a los gobiernos y pueblos regionales, también resulta evidente que esta cooperación y estos recursos son un factor de primera importancia en la lucha por afrontar muchos de estos problemas. Y algo que llama poderosamente la atención es la

desproporción entre la magnitud de los problemas del subcontinente y en general del Tercer Mundo y las dimensiones de la cooperación internacional orientada a contribuir a su superación.

Resulta clave entonces la necesidad de incrementar esa ayuda así como la de utilizarla dentro de estrategias adecuadas que correspondan a las prioridades reales del desarrollo del subcontinente. Todo indica que en esta década la asignación de recursos para la cooperación financiera y técnica internacional estará influida ante todo por la necesidad de aplicar criterios selectivos que eviten la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de recursos, promoviendo en cambio los proyectos multisectoriales de mediano y mayor alcance; pero también la ayuda tomará en cuenta la necesidad de que se produzcan en el interior de los países receptores de ella modificaciones necesarias dirigidas a la reforma del Estado, al aumento de la eficiencia pública y privada, a la democratización de las estructuras e instituciones, a la participación ciudadana; a la superación del estancamiento de la enseñanza superior; a la promoción de la inversión eficiente en ciencia y tecnología, y en general a la búsqueda de alternativas válidas para impulsar sobre bases mas armoniosas el necesario crecimiento de los países del área.

Algunas Ideas Claves

Es dentro de esta óptica y ya para finalizar este riesgoso intento de vislumbrar algunas perspectivas centrales de lo que podría ser la evolución de América Latina y el Caribe en los años venideros, que convendría dejar esbozadas tres ideas al parecer inseparables de toda búsqueda de cambios superadores del estancamiento actual de la región.

La primera de ellas se refiere a la manera de plantear las cosas, pues es probable que el examen de las perspectivas latinoamericanas para esta década tal como acaba de hacerse pueda ser considerado como demasiado pesimista. Pero sin olvidar que los cálculos que

podrían ser llamados optimistas cuando no se apoyan en bases sólidas resultan a menudo contraproducentes, está el hecho de que probablemente sean las tentativas de apreciar toda la gravedad de una situación como la latinoamericana y caribeña actual y todos los desafíos que deben ser aceptados si se quiere replantear el crecimiento sobre bases más firmes y más justas, las que -más allá de presuntos 'pesimismo'- podrían dar sustento al menos a discusiones que contribuyan con seriedad a la búsqueda de soluciones y alternativas válidas.

La segunda cuestión es la de las presuntas responsabilidades y la de la conveniencia de definir las, pues en toda crisis hay causas profundas que deben ser puestas en evidencia y superadas a objeto de poder emprender un mejor camino. El tema, delicado, resulta ineludible y de algún modo ha quedado en evidencia a lo largo del análisis. Pero hay cosas que deben precisarse aún y la principal de ellas es que si bien no queda duda de que determinados constituyentes estructurales de la crisis y de la limitación del crecimiento latinoamericano y caribeño son exteriores a la región y tienen que ver con formas de subordinación transnacional en términos fundamentalmente económicos y financieros, lo cierto es que la responsabilidad principal es regional, interna a los países, y tiene que ver con la forma ineficiente e injusta en que sus élites políticas y económicas han administrado las grandes posibilidades de crecimiento autosostenido que tuvo a su alcance el subcontinente en estas últimas décadas. Ningún despegue en dirección de un modelo más exitoso de crecimiento puede ignorar este hecho; y sólo la firme convicción de que son y serán los propios latinoamericanos, y particularmente quienes han administrado o administran en adelante sus recursos y sus riquezas, los responsables del fracaso o del éxito, podrá hacer surgir las energías y la participación necesarias a toda búsqueda de caminos que conduzcan a un mayor progreso social.

La tercera cuestión apunta en este último sentido. Más allá de mejoras coyunturales, más

allá de la existencia de recursos naturales y humanos acumulados y capaces, si se los moviliza, de servir de base a la superación de cualquier crisis, el hecho es que la situación global de América Latina y el Caribe parece estarse agravando; y todos los indicadores muestran cómo crece la brecha entre países pobres y países ricos; cómo la región latinoamericana, que hasta hace poco parecía a medio camino entre los países desarrollados y los menos desarrollados, tiende más y más a confundirse con estos últimos; cómo retrocede el Producto Bruto por habitante; y cómo se incrementan la desigualdad del ingreso, la marginalidad, el desempleo, el descontento social y la pobreza.

Ninguna previsión preocupada por la búsqueda del crecimiento económico global y el desarrollo integral de los seres humanos puede soslayar estas quemantes realidades. Es necesario que estos análisis, estas discusiones y estas propuestas trasciendan realmente y que unos y otras puedan alimentar el ansia de encontrar soluciones creativas y perfectibles; y sobre todo el espíritu de cambio y la participación democrática de todos los sectores interesados en él. Porque todo tiende a indicar que es esa conciencia de la necesidad de asumir responsabilidades y esa decisión colectiva de impulsar democrática y participativamente cambios profundos en beneficio de las grandes mayorías regionales lo que puede ayudar a que América Latina y el Caribe superen la amenaza de vivir otra década perdida, algo que podría ser fatal porque las oportunidades de crecimiento y desarrollo no son infinitas.

Desafíos Regionales Previsibles para los años 90 en las Areas de Competencia de la UNESCO

Dentro de un complejo cuadro como el examinado, pleno de desafíos que no pueden ser eludidos y de dificultades que deben ser resueltas, pleno también de posibilidades de cambio y de recursos que deben ser movili-

zados y aprovechados si se quiere avanzar de verdad, tendrá seguramente que desarrollarse la actividad de los organismos de cooperación en el subcontinente; y, mas particularmente, la de las áreas específicas de acción correspondientes a la UNESCO.

Es a partir de los estudios y prospectivas más recientes y de mayor alcance producidos por organismos de las Naciones Unidas, de esquemas, documentos o ponencias elaborados por cada una de esas áreas y básicamente de los materiales presentados por los grupos responsables de ellas en recientes encuentros y reuniones latinoamericanas, como la de Caracas en 1988 y la de Quito en 1989, que se han estructurado y redactado los párrafos que siguen, pretendiendo recoger en ellos lo esencial de los proyectos, planteamientos y propuestas de cada área de actividad de la UNESCO para la región latinoamericana y caribeña en lo que se refiere a los años próximos y tratando de que -al igual que todo el documento- estas ideas sirvan de base a una discusión capaz de enriquecer y profundizar propuestas y objetivos.

Educación

A nadie puede escapar la importancia que en esta decisiva década tiene para América Latina y el Caribe el resguardo de los avances logrados en años anteriores en el campo educativo, profundizando las conquistas obtenidas, superando las principales deficiencias perceptibles e impidiendo el crecimiento de claras tendencias hacia el estancamiento o hacia la involución, que especialistas en el área y científicos sociales vinculados a este género de problemas, ven con razón como una de las más graves amenazas para el futuro inmediato y a mediano plazo de toda la región latinoamericana.

Es conocida -y se ha tratado de resaltarla antes- la magnitud de lo logrado en el campo educativo por los países latinoamericanos y caribeños en las tres décadas de rápido crecimiento que precedieron a la crisis actual.

Pero es también necesario hacer énfasis en las limitaciones de ese importante logro: problemas generados por la masificación a expensas de la calidad; problemas de deserción y repitencia; deterioro de la universidad y débil relación de la educación a todos los niveles con el campo productivo y con la ciencia y la tecnología; falta de proyección de la educación hacia algunos sectores campesinos o indígenas, dificultad de continuar reduciendo más allá de ciertos límites las cifras de analfabetos.

Y conviene además señalar que en el contexto de crisis económica que viven los países del área y ante la constricción a que se ven sujetos de reducir el gasto social, es la educación uno de los campos mas seriamente amenazados. Ello obedece a sus altos costos (que en los países del subcontinente tienden a situarse entre el 10 y el 28% del presupuesto total de gastos del Estado); a que se trata de una inversión a mediano o largo plazo, esto es, cuyos resultados sólo se aprecian después de muchos años; y también a que la onda privatizadora que hoy invade a los países del área se está volcando sobre el campo educativo, tratando de justificar, en nombre de criterios de eficiencia y rendimiento que no han sido obtenidos sino muy moderadamente por la educación estatal masificada, la vuelta a patrones de educación privados que de aplicarse indiscriminadamente sin ser integrados a una concepción global de la educación podrían conducir al elitismo y a la exclusión de la enseñanza para grandes mayorías, a las que la crisis ha depauperado y a las que los modelos económicos en curso continuarán afectando seriamente.

Estos son problemas centrales que deben ser discutidos y afrontados porque de su adecuada solución dependerán en buena parte las posibilidades de la vida democrática y del crecimiento económico del subcontinente. La educación masiva es en efecto uno de los factores claves para desarrollar una identidad cultural propia, para contribuir a mejorar las condiciones de vida y trabajo de las grandes mayorías, para enfrentar los retos planteados por la aceleración de los cambios que se produ-

cen en ciencia y tecnología, para fortalecer una democracia participativa como la que debe servir de base a las políticas de reforma del Estado y al afianzamiento de la sociedad civil, y para aprovechar, en fin, las potencialidades y la capacidad de los individuos y de las colectividades en función del logro de un desarrollo pleno y justo.

Parece claro que es el Estado no sólo el responsable y el garante de una escolarización básica para toda la población, como promotor del compromiso educativo de todos los sectores sociales, sino también el único que puede asumir este objetivo, entendido como una costosa inversión de la sociedad en función de su futuro desarrollo y facilitadora de la incorporación de las grandes mayorías a la democracia, la participación ciudadana y el progreso social. Las fallas del Estado en este campo han sido grandes y el precio que se ha pagado por la gratuidad de la enseñanza y por la masificación a todos los niveles ha sido el de una baja de la calidad y el de un apreciable despilfarro de recursos nacionales. Pero aún así, los logros han sido importantes; y es difícil admitir que la solución a las deficiencias deba ser la de arrojar al niño con el agua del baño. Por ello convendría definir en este campo algunos objetivos cardinales, como la ratificación del papel del Estado en tanto garante de la educación básica de la población; la afirmación del necesario espacio para la iniciativa privada interesada en el área educacional, fundamentalmente en los niveles superior y técnico; y la búsqueda en el campo educativo de mecanismos capaces de desarrollar la educación masiva pero elevando los niveles de exigencia, de calidad y de igualdad.

Esto parecería ser el camino para acercarse al cumplimiento de compromisos regionales como el de México, en 1979, mediante el cual los países latinoamericanos y del Caribe asumieron la responsabilidad de dar apoyo a un Proyecto de Desarrollo Educativo Regional en tanto factor decisivo para impulsar el desarrollo y para enfrentarse a la pobreza crítica creciente en la región; o compromisos mundia-

les, como el de Jomtiem (Tailandia), en 1990, mediante el cual todos los países del mundo acaban de aprobar una Carta Mundial sobre la Educación para Todos, en la que se fijan principios, acciones y estrategias orientadas al logro de la universalización de la educación y el aprendizaje básicos, entendidos no sólo como un derecho de todo ser humano sino también como una de las condiciones indispensables de cualquier proceso de desarrollo y de superación de la pobreza.

En la lucha por este difícil objetivo, los países de América Latina y el Caribe tendrán que enfrentar serios obstáculos, ya que el aumento de la pobreza, la desocupación y el desempleo amenazan con elevar las tasas de analfabetismo juvenil y adulto, la desescolarización, la deserción y la repitencia; y ya que el necesario replanteamiento de la educación básica dentro de un contexto de creciente miseria y hacinamiento urbano como el regional implica continuar el desarrollo de experiencias creativas y a menudo costosas y complejas, como las orientadas a enfrentar el deterioro del niño latinoamericano por la vía de proyectos comunitarios de desarrollo, con educación prioritaria y vinculados a estrategias de enfrentamiento de la pobreza.

Estas y otras experiencias de desarrollo y mejoramiento de la educación básica requieren de la elaboración de planes de mediano alcance que superen el tradicional inmediatismo, de planteamientos creativos acerca de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje, de mejoras cualitativas del proceso educativo básico, de la difusión de proyectos de carácter interdisciplinario, de una enseñanza preocupada desde temprano por la ciencia y la tecnología, y de propuestas orientadas a relacionar mas sistemáticamente el conocimiento con los contenidos sociales y con los problemas regionales, nacionales y locales. Es esto al menos lo que se deriva del Congreso Internacional acerca del Planeamiento y la Gestión del Desarrollo de la Educación que acaba de finalizar en México. Parece claro que en este terreno, tanto en la enseñanza primaria como en la

secundaria y en la mas propiamente técnica, el papel del Estado en términos de fijación de objetivos y mecanismos de evaluación y control y de concertación con grupos participativos tanto privados como comunitarios resultará esencial y que también en muchos terrenos la cooperación de los organismos de apoyo internacional será muy importante y necesaria.

Los problemas relacionados con el estímulo y mejoramiento de la educación técnica y con la coordinación adecuada entre las diversas ramas y niveles del sistema educativo deberán ser considerados, pero tan importantes y urgentes como estos, son los problemas de la educación superior, en los que será necesario emprender prontas y decididas reformas para poner a la universidad latinoamericana a la altura de sus responsabilidades y de las tareas que exige el crecimiento. A la universidad latinoamericana se le plantea el reto impostergable de superar la problemática generada por la masificación de las dos décadas pasadas: baja calidad, altos costos, poca eficiencia, débil relación con la ciencia y la tecnología avanzadas, desvinculación con la sociedad y particularmente con el mundo empresarial y productivo.

Las grandes tareas que esperan en esta década a la universidad latinoamericana son, entre otras: aprovechar con mayor rentabilidad social y económica los importantes recursos tanto públicos como privados que utiliza; incrementar su capacitación científica y tecnológica para vincularse institucionalmente a las necesidades de la sociedad y del sector productivo que de ella necesita; y fomentar la investigación y los proyectos económicos que no solamente contribuyan al crecimiento económico y al mejoramiento social sino también a generar nuevos recursos financieros indispensables para su funcionamiento y expansión.

Para ello será indispensable la constante búsqueda de una mayor eficiencia, la reestructuración de muchas disciplinas y el planteo de propuestas orientadas a afrontar el desafío

tecnológico mediante diseño de políticas y previsión de recursos financieros y humanos. En la persecución de estos objetivos se han logrado ciertos avances y existen importantes centros de excelencia en varias universidades latinoamericanas y caribeñas, habiéndose incluso diseñado en ciertos casos proyectos de redes regionales de postgrado y alternativas de financiamiento y de servicios a través de convenios con instituciones públicas, con empresas y con gremios y asociaciones.

Ciencia y Tecnología

Aún más que en educación, los retos para América Latina y el Caribe en el campo de la ciencia y la tecnología para la década que nos separa del siglo XXI son formidables. De no ser afrontados y al menos resueltos parcialmente, las perspectivas de crecimiento de la región pueden verse afectadas en forma definitiva, por lo que se hace imprescindible en este campo superar el nivel de los buenos propósitos.

Más allá de los problemas de la dependencia y del control tecnológicos; más allá del rápido avance de los países desarrollados en el terreno de la ciencia y la tecnología, que contribuye a acentuar la brecha que los separa del mundo llamado en desarrollo; y más allá de los elevados costos de la mayor parte de las inversiones científicas y tecnológicas de punta, que dificultan el acceso a las mismas por parte de países pobres en recursos y abrumados por círculos viciosos de pobreza y endeudamiento, está el hecho aceptado por todos de que las sociedades latinoamericanas y caribeñas no están suficientemente orientadas hacia la ciencia y la tecnología, de que los sistemas educativos no están adaptados a la necesidad del avance tecnológico y científico y de que los mismos gobiernos y sectores productivos nacionales no se deciden a comprometerse a fondo en los serios esfuerzos que implica asumir el desarrollo científico y tecnológico como una auténtica prioridad y como una inversión básica que, no obstante lo costosa, parecería ser una de las insoslayables condiciones del logro de un mejor futuro.

Indicadores de esta peligrosa situación son, entre otros: la desarticulación existente entre los planteamientos educativo y socio-económico y el de la ciencia y la tecnología; la precariedad de las investigaciones científicas, no obstante algunos logros importantes, y su frecuente desvinculación de una política de desarrollo; la ausencia de cálculos acerca de los costos y la productividad de las investigaciones que se hacen en la región y la poca articulación de las mismas entre sí; la pérdida de calidad de la institución universitaria masificada y su desvinculación de la sociedad y del sector productivo; la insuficiente articulación entre el sector que produce bienes y servicios y la investigación e innovación tecnológica; la desarticulación entre este último campo y las demandas del mercado de trabajo para profesionales y mano de obra calificada.

No obstante estas dificultades no resueltas y pese a la muy escasa inversión de los Estados regionales en el campo de la ciencia y la tecnología, se han invertido esfuerzos y obtenido ciertos resultados en varias tecnologías avanzadas como son la informática y la biotecnología, particularmente en algunos países del área. En el terreno de la informática han sido importantes los esfuerzos de Brasil, de la Argentina y de México; y tanto los criterios en que se han basado esos esfuerzos como la importancia de lo logrado en cada caso han suscitado interesantes discusiones.

Los mas importantes desarrollos en el campo de la informática corresponden al Brasil, cuya política en este terreno se ha orientado desde los años setenta, con el apoyo y el financiamiento de las fuerzas armadas, a financiar investigaciones en la tecnología de la información y cuyos avances han permitido, una vez constituida en 1976 la Comisión de Coordinación de Actividades de Procesamiento Electrónico, reservar el mercado interno de minicomputadoras para empresas de capital nacional. Esta política, orientada a estimular el desarrollo científico y tecnológico en el sector informático, ha sido firmemente impulsada en la década de los ochenta mediante la aprobación

de la Ley 7232 en 1984 y mediante la creación del Consejo Nacional de Informática y Automatización. Actualmente el mercado de electrónica e informática del Brasil es uno de los diez primeros del mundo, y de un total de más de 800.000 computadoras en uso en el país para 1986, el 98% eran de producción nacional. La producción se orienta hacia el expansivo mercado interno y a pesar de confrontar problemas de muy alto costo comparativo, de no muy elevada calidad y de más bien deficiente servicio, la inversión en investigación y desarrollo es importante en el sector y los esfuerzos del gobierno, las empresas, las universidades y las fuerzas armadas son significativos y constantes. No obstante la crisis del país, el esfuerzo se mantiene; y pese a dificultades técnicas con empresas transnacionales del ramo, se han logrado éxitos en automatización de redes bancarias, en producción de microcomputadoras y en fabricación de obleas de silicio.

También ha habido esfuerzos importantes pero de signo diferente en Argentina y en México. Aún habiendo comenzado en fecha relativamente temprana, la política argentina en el área de la informática no ha avanzado suficientemente y ha sido severamente afectada por décadas de crisis. Su objetivo ha sido, como en Brasil, adquirir capacidad tecnológica nacional pero no se intentó reservación de mercados sino sólo la aplicación de un sistema de derechos arancelarios declinantes en el tiempo, combinado con la promoción de incentivos a la inversión y con facilidades a la importación de componentes para proyectos de desarrollo auspiciados por el gobierno. Sin limitar la inversión extranjera, se exigió a las empresas del ramo mayoría absoluta de capital nacional y compromisos de desarrollar tecnologías locales. Los resultados han sido limitados y además de la profunda crisis del país han incidido en ello la exagerada dimensión de los programas, las limitaciones de tamaño del mercado y la competencia representada por el contrabando.

México, por su parte, ha seguido un camino distinto, mas orientado hacia la exportación

ysin plantearse reserva de mercado ni desarrollo tecnológico independiente. Las pautas parecen haber quedado establecidas en un documento no oficial de 1981. Una de ellas es el otorgamiento gubernamental de autorizaciones para importar. El grado de integración local del sector es muy reducido y se da prioridad al objetivo exportador. Para ello, y bajo influencia de grandes empresas transnacionales, se han liberalizado las normas reglamentadoras de la inversión extranjera. Tampoco existen compromisos formales orientados al desarrollo tecnológico local, como en Brasil o en Argentina. El número de empresas ha aumentado, pasando de cuatro en 1981 a sesenta en 1986, y la producción de microcomputadores se refuerza con la de periféricos. No obstante, hay problemas de suministros y más del 80% de las exportaciones están a cargo de empresas extranjeras o de filiales de las mismas.

Otro terreno en el que se continúan invirtiendo esfuerzos que deben continuar en esta década es el de la biotecnología, el cual ofrece también importantes posibilidades para el desarrollo regional. Hasta ahora la biotecnología no es una industria con productos de venta masiva como la informática, pero siendo una industria a menudo incipiente cuenta no obstante con un gran potencial que debe desarrollarse en años venideros y tiene la ventaja de que sus costos no son siempre elevados.

La biotecnología, tanto la vieja (concerniente a hibridación de vegetales, a cruces animales y a procesos de fermentación) como la nueva (centrada en técnicas recientes de ingeniería genética con incalculables posibilidades transformadoras), por su carácter aún incipiente en muchos campos, por su intensidad científica y por sus flexibles formas organizativas abre un espacio importante para la ciencia y la investigación latinoamericana y caribeña. Algunos de estos terrenos vienen siendo explorados en la región y estos esfuerzos deberán ser alentados, sistematizados, racionalizados e integrados a escala que los haga más eficientes y más beneficiosos.

Hay importantes logros en la biotecnología basada en la llamada 'biomasa', que permite producir alcohol a partir de bagazo de caña y que ha sido parte del Programa Alcohol promovido por el Estado brasileño para reducir la dependencia del petróleo en automóviles y otras maquinarias. También los hay en procesos mas simples y tradicionales como fermentaciones lácteas, de vino y de cerveza. Se están desarrollando biotecnologías en la fijación de nitrógeno por diversas plantas, particularmente en el caso de la soya, cuya producción es importante en Argentina y en Brasil. Hay avances y diseños biotecnológicos en el campo farmacéutico, en la fabricación de aminoácidos y enzimas. Las técnicas mucho mas costosas y complejas de ingeniería genética apenas se han iniciado en la Argentina y el Brasil y deberán casi seguramente ser desarrolladas a partir de programas cooperativos entre varios países de la región y contando con apoyo de organismos financieros internacionales. El apoyo gubernamental y la formación de recursos humanos en relación con los centros de enseñanza superior y con el sector empresarial resultarán también fundamentales para alcanzar algún resultado en este campo.

Lo último señalado es importante porque, más allá de ciertos logros, lo que se requiere es una reformulación sustancial de las condiciones socioeconómicas, culturales, educativas y políticas que en los países de América Latina y el Caribe hacen de la investigación científica y en general de la ciencia y la tecnología una actividad mas bien marginal o periférica y no una parte estructural de la actividad orientada al desarrollo y a la mejora global de las condiciones de vida de las sociedades regionales. Será por ello necesario formular y ejecutar políticas dirigidas a integrar la ciencia y la tecnología a las perspectivas de desarrollo latinoamericano y caribeño mediante asignación de recursos suficientes en los presupuestos nacionales, mediante la reformulación del sistema educativo, mediante estímulos adecuados a la promoción de investigaciones y desarrollos tecnológicos por parte del Estado, las

universidades y el sector productivo, mediante proyectos de cooperación científica regional y mediante el concurso de organismos de ayuda internacional para la implementación de proyectos mas importantes y costosos.

Es esa permanente política dirigida a reformular las relaciones entre la formación de científicos y técnicos para el desarrollo latinoamericano y caribeño y el contexto necesario a esa adecuada inserción social de la ciencia y la tecnología en la cotidianeidad latinoamericana lo que permitirá enfrentar con posibilidades de éxito una de las grandes amenazas que en este terreno afectan y seguirán afectando a la región: la permanente y sistemática fuga de cerebros. Es cierto que la profundización de la crisis ha acentuado esta tendencia y en países como Argentina la emigración de jóvenes profesionales y técnicos -a menudo de origen europeo- hacia los Estados Unidos, Canadá o los países del Viejo Continente se ha convertido en un fenómeno masivo de descapitalización intelectual. Pero el proceso tiene raíces mas profundas y las pocas condiciones favorables que brindan los países del área a la ciencia y a la investigación combinadas con la cada vez más grande necesidad de profesionales, científicos y técnicos planteada por el crecimiento científico y tecnológico de los países industrializados, están convirtiendo a América Latina y el Caribe, dentro de un nuevo modelo de descapitalización masiva tan peligroso como el generado por la deuda externa, en exportadora sistemática de cerebros, materia prima básica para el desarrollo, por los países industrializados, de esas nuevas tecnologías sin el acceso a las cuales no hay crecimiento autónomo.

Resultará por ello indispensable: en lo concerniente al Estado, aumentar sustancialmente la magnitud de los escasísimos recursos dirigidos a ciencia y tecnología y garantizar tanto el empleo eficiente de los mismos hacia áreas consideradas prioritarias como la continuidad y control de los proyectos; en lo concerniente al Estado y al sector privado, estimular la innovación tecnológica de las empresas, estimar los costos de adquisición de tecnolo-

gías respecto de desarrollos tecnológicos propios y fomentar el avance de estos últimos mediante el diseño y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos apropiados; y en lo concerniente al Estado y a los centros de enseñanza, mejorar la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la primaria y la secundaria ampliando en una y otra el campo de utilización de la informática, racionalizar la estructura del pregrado en función de evaluar la importancia del desarrollo y de la innovación científica y tecnológica y ajustar los sistemas de postgrado y la formación de investigadores y científicos a las perspectivas del mercado latinoamericano.

Comunicaciones, Cultura y Ciencias Sociales

Uno de los problemas mas difíciles y delicados para el futuro de América Latina y el Caribe es el representado por el control y manejo de los cada vez más importantes sistemas de comunicaciones. Es claro que ningún desarrollo autónomo, como el que quieren los latinoamericanos, puede apoyarse en un sistema de comunicaciones como el actual, caracterizado por el absoluto control transnacional y por la sistemática manipulación de la información y dirigido hacia una homogeneización de patrones y valores culturales que resulta impuesta desde ciertos centros.

La dependencia comunicacional y cultural es una de las trabas no por sutiles menos poderosas que más contribuye a dificultar el desarrollo autónomo de los países de la región. Los especialistas del área de las comunicaciones estiman necesario en este sentido hablar del llamado paradigma transnacional, que resulta ser el principal obstáculo, tanto tradicional como reciente, al logro de un sistema comunicacional al servicio de intereses más propiamente latinoamericanos.

En efecto, en lo concerniente a la comunicación en su sentido mas usual, esto es, lo referente a medios comunicacionales escritos o audiovisuales, el paradigma transnacional es

clave y lo que se constata es que unos y otros sistemas son no sólo unidireccionales y nula-mente participativos sino que manipulan y desinforman al receptor de los mensajes, que tratan de homogeneizarlo en base a patrones a menudo poco emparentados con su cultura propia y que dan escasa o nula cabida a la producción endógena de la región y a las manifestaciones del carácter plural y multiforme de las culturas latinoamericanas. En lo que respecta a la comunicación en su sentido más moderno, es decir, en lo relativo a la informática, la teleinformática y los bancos de datos, el paradigma transnacional aparece de nuevo con mayor peso, pues su incidencia sobre la producción, control y difusión de las informaciones sobre América Latina, lo mismo que sobre el campo de la microcomputación y de las emisiones satelizadas, es igualmente decisivo.

Aún cuando lo planteado no es un regionalismo o localismo de carácter xenófobo, capaz de conducir al aislamiento y empobrecimiento informativo y cultural de América Latina y el Caribe, no hay duda de que uno de los grandes desafíos planteados en el campo de las comunicaciones para el subcontinente es la necesidad de enfrentar, mediante la cooperación y coordinación regional, la manipulación informativa y la homogeneización forzosa alentadas por la comunicación transnacionalizada, constituyendo para ello los instrumentos y mecanismos que, a nivel tanto de la prensa como de la televisión, del video, de la microinformática y del manejo de datos comunicacionales, permitan el desarrollo de un apreciable y necesario margen de autonomía de la región, capaz de servir de apoyo a posturas más independientes y a un crecimiento global menos sujeto a interferencias.

Pero como parte de estos objetivos surgen inquietudes que todo indica estarán en primer plano en el campo de las comunicaciones para los años venideros en el subcontinente. Se trata ante todo de redimensionar el problema mismo del paradigma transnacional, pues no hay que olvidar que los patrones internos en mate-

ria de comunicaciones reproducen y sustentan este paradigma en la medida en que los canales televisivos y los medios comunicacionales de nuestros países en su mayor parte no son a menudo otra cosa que la expresión interna de ese dominio transnacional. Se trata asimismo del urgente problema de la democratización de las comunicaciones y de definir hasta dónde es posible impulsar procesos democráticos y participativos de reforma de las instituciones sin que esos mismos procesos afecten en el mismo sentido a los medios comunicacionales. Se trata también de definir y reducir los límites de la manipulación informativa y de determinar hasta dónde es viable hacer prevalecer intereses particulares que ponen estos poderosos mecanismos de información y de creación de opinión al servicio de pequeños y poderosos grupos por sobre intereses colectivos y patrones de desarrollo social global. La responsabilidad del Estado y de los gobiernos latinoamericanos y caribeños en el sentido de asumir reales responsabilidades de orientación, programación y autonomización en este campo así como la urgencia de definir las relaciones entre el Estado y el capital privado en el campo de los medios de comunicación y entre los intereses nacionales y los transnacionales en el manejo de informaciones y patrones culturales serán un problema clave y particularmente delicado, por los poderosos intereses en juego y por la actual tendencia a acentuar la privatización ya notable en este campo.

Los problemas en el sector comunicacional se vislumbran serios y los esfuerzos por delimitar fronteras, responsabilidades y terrenos de beneficio común para el desarrollo del subcontinente deberán ser grandes y sostenidos. La integración regional tiene aquí un papel importante que jugar y deben ser destacados los esfuerzos recientes para impulsar, a partir de la Acción de Sistemas Informativos Nacionales creada en 1979, una auténtica agencia latinoamericana de noticias y los proyectos de igual alcance previstos en el área de la comunicación auditiva y audiovisual para fechas no lejanas. Fundamental también en este campo

por sus relaciones con el desarrollo científico y tecnológico regional es el **Programa General de Información (PGI)** y la actividad desarrollada por el Consejero Regional del mencionado programa para América Latina y el Caribe. Este programa brinda asesoría técnica a los Estados de la región en la elaboración de políticas y planes nacionales de información así como apoyo al desarrollo de las infraestructuras nacionales correspondientes; a la formación de personal y a la aplicación de las normativas previstas para la gestión de servicios informativos.

Igualmente se anuncian importantes los problemas y objetivos en el campo de la cultura. Tema central en este campo para el subcontinente es el de la pluralidad y diversidad cultural y el del reconocimiento del derecho a la existencia de culturas tradicionalmente sometidas a patrones homogeneizadores asociados con una concepción del desarrollo validadora de una única legitimidad cultural y justificadora de diversos niveles de asimilación forzosa lindantes más de una vez con el etnocidio.

El escenario previsible en este campo por los estudiosos de los problemas culturales latinoamericanos para la década que se inicia, es el del incremento de las demandas y reivindicaciones de los grupos culturalmente diferenciados, lo que sin duda conducirá a una acentuación de las tensiones que oponen a estos grupos culturales con el Estado y con los sectores sociales que aún se oponen al pluralismo cultural. Las alternativas son múltiples, pero en lo esencial es posible que en algunos casos resurjan los intentos de etnocidio y que en otros el acentuamiento de las tensiones agudice los enfrentamientos de los grupos culturales y el Estado. El escenario preferible, y que por ello constituye el objetivo a lograr para los especialistas del área, sería el de la creación, como producto de esas inevitables tensiones, de espacios mayores para el diálogo y el acuerdo, que hagan posible el reconocimiento creciente de la multiplicidad cultural y la reducción de las tensiones originarias al respecto.

La UNESCO se orientaría en este terreno, por una parte, a ampliar el margen de conocimiento del pluralismo cultural propio de América Latina y el Caribe; a promover la apertura de espacios para el diálogo intercultural; a estimular la reflexión científica acerca de las potencialidades de desarrollo específico planteadas por las distintas culturas; a apoyar los proyectos experimentales de desarrollo cultural endógeno; y a difundir las experiencias tanto positivas como negativas orientadas a la reconstrucción de sociedades multiétnicas y multiculturales como son las sociedades latinoamericanas y del Caribe. Pero, por otra parte, deberá dar la consideración debida a dos cuestiones de algún modo ineludibles. Una de ellas es la comprensión del amplio campo que abarca lo cultural, una vez superadas tanto la tendencia tradicional y elitesca orientada a identificar cultura con bellas artes como la respuesta extrema que conduce a la reducción de lo cultural a su sola dimensión indigenista, por importante que esta sea. Otra, la sería amenaza que para el enfrentamiento de la problemática cultural en su sentido más amplio por parte del Estado representa el auge neoliberal y monetarista que, así como busca reducir los gastos en el campo educativo, intenta hacer lo mismo en el mucho más vasto pero fácilmente atacable terreno de la actividad y el desarrollo culturales.

En el campo de las ciencias sociales, los problemas y los desafíos son aún más grandes. Los diagnósticos y las prospectivas al respecto parten de constatar la crisis de paradigmas existente en el campo de las ciencias sociales a nivel mundial y la existencia de problemas críticos en todos los ámbitos del desarrollo social latinoamericano, que exigen la búsqueda de alternativas válidas, fundadas en lo posible en posiciones teóricas innovadoras y excluyentes de todo dogmatismo.

Rápidos y a menudo conflictivos cambios se han operado en la sociedad latinoamericana y caribeña de estos últimos años: la profundización de la crisis económica; el incremento de la miseria y de la marginalidad; la injusticia

social dramáticamente revelada por los modelos de acumulación; los generalizados avances democráticos; el progreso de la imprescindible reforma institucional; el fracaso de los Estados centralizados y el auge de los procesos participativos reanimadores de la sociedad civil; los problemas de la educación, la ciencia y la tecnología, la cultura y las comunicaciones; las amenazas de mayores niveles de atraso y de renovados mecanismos de dependencia y limitación de la autonomía. Coincidiendo con ellos, se ha producido a nivel mundial la recesión y la ulterior reestructuración del mundo capitalista y -hecho aún más significativo- la crisis profunda del sistema socialista y el cuestionamiento de un modelo de organización social considerado largo tiempo como ejemplo de una más justa concepción del mundo y de la sociedad.

Estos dramáticos acontecimientos no han podido menos que acentuar la crisis paradigmática ya en curso en una ciencia social crítica que se ha sentido rebasada por los acontecimientos y que, en espera de una necesaria recuperación, ha debido centrarse en la región en análisis de problemas importantes pero de más limitado alcance, como el estudio de la debilidad institucional, la crisis de la educación superior, la participación ciudadana y la profundización de la democracia, el crecimiento de la economía informal y el enfrentamiento de la marginalidad social, de la pobreza crítica y de la delincuencia urbana.

Todos estos problemas son importantes, incluso fundamentales, y nadie pensaría en dejarlos de lado. Esfuerzos, estudios y proyectos en cada uno de estos campos, cuyo denominador común es el replanteo de la inserción de la ciencia social dentro del todo social, son absolutamente necesarios y ocuparán bastante espacio dentro del campo de actividades de los científicos sociales latinoamericanos durante los próximos años. Pero el replanteamiento del desarrollo para América Latina y el Caribe, la necesidad de encontrar alternativas viables para superar la crisis y para trazarse objetivos válidos en función de un crecimiento más ar-

mónico, más justo y más durable, reclamará de los científicos sociales latinoamericanos y caribeños, que han superado serias crisis epistemológicas y que han sido capaces de elaborar teorías explicativas del subdesarrollo y de la dependencia, el diseño y discusión de alternativas teóricas de mayor alcance que las ensayadas en estos años de crisis del pensamiento crítico; y capaces -sin dejarse arrastrar por el dogmatismo y la excesiva autoconfianza- de aglutinar ideas y participación social en busca de los cambios que América Latina y el Caribe necesitan para abrir camino al progreso de sus pueblos.

Breve Recuento Bibliográfico

En la elaboración de este documento se han utilizado numerosas fuentes o textos emanados de la UNESCO y de diversos organismos de las Naciones Unidas, pero también muchos materiales de variada procedencia, oficiales o no, relativos a la problemática de América Latina y el Caribe. Como la idea no es elaborar una bibliografía detallada al respecto, sino hacer sólo algunas necesarias referencias, nos limitaremos en lo que sigue a mencionar rápidamente los principales textos, documentos o materiales, empleados para hacer este trabajo.

Fundamentales han sido los documentos oficiales acerca de América Latina y el Caribe emanados de las Naciones Unidas, de la UNESCO, del BID, del PNUD, del SELA y de la CEPAL, como son, entre otros, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe correspondiente a 1988 y el Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe para 1989, ambos a cargo de la CEPAL, los Informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo correspondientes a 1988 y 1989, diversos documentos sobre aspectos específicos de la situación y las perspectivas latinoamericanas emanados del SELA y de la CEPAL, y algunos documentos emanados del PNUD, como UNDP in Latin America and the

Caribbean, Register of Development Activities of the United Nations System y S.M.A.R.T. Profiles correspondientes a 1989. Para un marco general de las actividades y programas de la UNESCO para los años próximos, se ha revisado el **Third Medium-Term Plan (1990-1995)** emanado de la Organización y recientemente publicado.

Para las prospectivas regionales en las áreas de competencia de la UNESCO, se han empleado diversos materiales y fuentes de información actualizada, fundamentalmente informaciones o propuestas emanadas de las mismas áreas; y también los documentos y conclusiones de las reuniones de consulta efectuadas en Caracas en 1988 y en Quito en 1989. También se han consultado diversos materiales recientes sobre educación, comunicaciones, cultura y ciencia y tecnología, entre ellos el completo estudio sobre **Ciencia y Tecnología en América Latina** incluido en el Informe del BID correspondiente a 1988, y diversos documentos de la UNESCO, como **Evolución Cuantitativa de los Sistemas Educativos de América Latina y el Caribe**, **Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje: una Nueva Visión para el Decenio de 1990**, **Carta Mundial sobre una educación para todos y Proyecto Regional Educación Superior y Sectores Productivos en América Latina y el Caribe**.

Para la elaboración del marco general y de la prospectiva global latinoamericana y del Caribe, se han utilizado abundantes materiales de diversa procedencia, fundamentalmente de la CEPAL, del SELA o de CLACSO, pero igualmente el trabajo **Lecciones ganadas de una década perdida**, elaborado por Mario Calderón Rivera para el PNUD en 1989 y también diversos textos de la colección **América Latina hacia el año 2000**, recopilados y editados por Nueva Sociedad, Caracas, en los que se recogen, tanto sobre el conjunto de la región como sobre diversos países en particular, ensayos y artículos de connotados economistas, sociólogos y científicos sociales latinoamericanos y caribeños acerca de los más diversos aspectos de la problemática actual y de las perspectivas del subcontinente. Muy importantes han sido las recopilaciones **América Latina hacia el 2000**, **América Latina en el Mundo del Mañana**, **Profundización de la Democracia**, y los estudios particulares correspondientes a Venezuela, Costa Rica, Chile, México y Argentina. Diversos materiales y ponencias nacionales presentadas en varios seminarios locales y regionales acerca de la deuda externa, sobre todo en los casos de Brasil y de Venezuela, también han sido de gran utilidad.